

Zapatismo, región y nación

Sergio Zermeño

Sergio Zermeño: investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Nota: este artículo es un comentario al trabajo «Zapatismo y movimientos étnico-regionales en México», de Gunther Dietz, incluido en la presente entrega.

Resumen:

No cabe duda que Chiapas ha venido a poner en claro que tan excepcional es el México *profundo* como el México *transnacional*. Pero tan iluso sería querer trasladar el país hacia un extremo como hacia el otro, pues entre el 20% del México tradicional y el 30% del integrado se extiende, con toda su crudeza y su desorden, el México *roto*, el desarraigado y el de la modernización salvaje.

El artículo de Gunther Dietz constituye un excelente análisis de la manera en que, durante los últimos veinte años, se ha modificado la articulación entre el Estado mexicano (sus agencias políticas y asistenciales) y el México «profundo», indígena y rural, en el que –dice Dietz citando a Bonfil Batalla–, pervive la antigua civilización mesoamericana: es una historia que nos habla de la crisis del corporativismo agrario del partido de estado, agudizada por las apresuradas políticas de modernización de la agricultura; del fracaso del indigenismo como programa de integración de las minorías étnicas al Estado-nación; del surgimiento paralelo de un movimiento campesino independiente y de sus formas de organización que transitan desde la lucha por la tierra hacia la lucha por el control de los recursos naturales y del proceso de producción.

1. Las siguientes líneas resumen bien la orientación de sus argumentos: «la esperanza para las comunidades indígenas de abrir canales propios en los parlamentos estatales o federales por medio de candidatos indígenas a diputados se vio truncada porque dichos candidatos o bien conseguían hacer carrera en la capital (con lo que se volvieron inalcanzables para sus bases) o bien fueron marginados por la cúpula de su propio partido poco después de las elecciones. Esto generó –agrega Dietz– que una gran parte de políticos y funcionarios indígenas se reinsertará en sus comunidades intentando vencer las divisiones internas y convirtiendo a la comunidad en el punto de partida de un novedoso

movimiento indio» que coincide con la intensa discusión desatada por los acontecimientos en torno a «los quinientos años».

Así, se echa a andar una red que va más allá de lo local conformando alianzas regionales mejor pertrechadas para negociar ante las instancias gubernamentales. Nacen organizaciones que representan a varias comunidades, cuyo marco unificador no es simplemente la identidad étnica sino la región habitada de forma conjunta. La defensa de la autonomía de las regiones indígenas se ve acelerada por los intentos de privatización forzada legalizados por el salinismo con la reforma al artículo 27 constitucional. «Dado que en muchas zonas rurales, establece Dietz, la penetración de empresas privadas interesadas en adquirir terrenos comunales o ejidales no afecta en primer lugar a las parcelas agrícolas a menudo poco rentables, sino antes que nada a la explotación de los recursos naturales –sobre todo madera, yacimientos minerales y reservas acuíferas– esta penetración trasciende el nivel local para convertirse en un factor de cambio regional. Para poder actuar ante esta amenaza, las comunidades están obligadas a vencer su aislamiento local y a hacer valer a nivel regional su derecho a controlar los recursos comunales propios...» Aparecen las coaliciones de comunidades, la lucha conjunta por los pocos recursos que el Estado sigue ofreciendo, se refuerzan los proyectos de desarrollo agropecuario e infraestructural de provecho para toda la región, lo que hizo posible declaraciones como la siguiente, venida del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena: «Los pueblos indios demandamos que se cree un nuevo piso de poder regional autónomo en el país, además de los pisos federal, estatal y municipal, todos en el marco de la unidad nacional».

2. «La autoconcepción del EZLN como un movimiento armado que lucha... por conquistar espacios civiles para crear una plataforma política para todos los mexicanos ha constituido un importante desafío para los movimientos indios: el desafío de dejar atrás su aislamiento local y regional y de emprender el giro hacia la sociedad civil». En efecto, en este punto entre lo local-regional y lo nacional se han generado ciertas tensiones entre organizaciones indígenas y campesinas, por un lado, y el EZLN por el otro, y en torno a esto quisiéramos desarrollar algunos puntos con la pretensión de completar las reflexiones de Dietz. Tomemos como punto de partida la reciente «consulta» (referéndum) de agosto de 1995, por medio de la cual los zapatistas pusieron a consideración de todos los mexicanos la posibilidad de devenir una fuerza política y hacer pasar a segundo plano su autodefinición como fuerza beligerante. «¿Realmente el pueblo de México nos espera como una fuerza política organizando la lucha a nivel nacional? (se preguntaba el subcomandante Marcos frente a la periodista Carmen Lira, a unas horas de la Consulta). Porque a eso aspiramos prosigue –a ser una fuerza política nacional, no local... Nuestro trabajo va a terminar en la construcción de ese espacio de nuevas relaciones políticas» (*La Jornada*, 25-26/8/95).

El resultado de la Consulta, sin embargo, no coincidió exactamente con esta visión general, nacional, de lo que debe ser el zapatismo: los votantes no quisieron, en un 53% (contra 37%), que el EZLN, al abrazar la vía política, se uniera (¿se mezclara?), con el resto de las organizaciones políticas existentes; y algo más revelador: entre la población indígena este sentimiento fue más acentuado (60%/30%). Es más, en ciertos poblados fuertemente zapatistas como Patihitz, la asamblea de ARIC-independiente votó en forma unánime por que el EZLN no se uniera con el resto de las fuerzas políticas. Curiosamente la votación en la asamblea de las ARIC-oficiales, fuertemente controladas por el gobierno, es obvio, votó unánimemente por que sí se uniera al resto de las fuerzas políticas nacionales (Rosa Rojas, *La Jornada*, 7/9/95).

Incluso, en la Asamblea Nacional Indígena (expresión india de la zapatista Convención Nacional Democrática), que tuvo lugar en Oaxaca paralelamente a la Consulta, varios delegados coincidieron en que para el alto mando zapatista «está predominando el diálogo nacional», y manifestaron su extrañeza por el hecho de que el EZLN no haya incluido la demanda del «reconocimiento de los derechos de los pueblos indios» para no decir autonomía, pues agregaban que ese término parece asustar a mucha gente (*La Jornada*, 27/8/95).

En varios momentos de este conflicto se ha planteado el asunto de «lo local y lo nacional». ¿Ser local quiere decir perderse en el olvido de las Cañadas y la selva Lacandona? ¿Ser fuerza nacional quiere decir lo contrario?

El zapatismo surge como una fuerza reivindicativa en torno a la pobreza y la segregación secular, hoy agudizada, de las regiones indígenas de Chiapas: se trata de la reconstrucción de una identidad social y cultural, local y regional, favorecida por la llegada y el trabajo paciente de una juventud que rompió radicalmente con el proyecto dominante de desarrollo nacional, una moral directamente contrapuesta a la locura globalizadora y al oportunismo de las fuerzas políticas de «los integrados». Así lo expresó el propio Marcos en «El Sureste entre dos vientos...».

Muchos coincidimos en que desde esta posición el zapatismo construyó su fuerza, y los resultados de la Consulta del domingo 27 de agosto de 1995 nos lo corroboran. Es con base en esta dimensión local-regional convertida, en el extremo, en utopía redentora que se han formado grupos de apoyo al zapatismo en todas partes del mundo: desde lo local-regional, desde las Cañadas y la Lacandonia, el zapatismo logró una proyección universal.

Pero quizá sucede que el EZLN ha considerado que no hay solución regional si no hay primero solución nacional, que nada se puede desde lo local, que es necesario acumular primero la mayor cantidad de fuerzas inconformes para, así, aunque sea por la vía electoral, derrotar al gobierno, a su partido, al neoliberalismo y a las fuerzas dominantes que hoy son transnacionales. Cómo no respetar esa idea y, sin embargo, cómo no recordar que con esa lógica se han perdido la casi totalidad de las luchas sociales de la historia posrevolucionaria de México.

Nos dice Marcos en su comunicado del día de la Consulta: «El ¡ya basta! se multiplica... el ridículo golpe a los trabajadores de Ruta 100 (red de autobuses de la Ciudad de México), puso a la dignidad obrera en las calles; la sordera a los reclamos democráticos del pueblo tabasqueño provocó que el Exodo de la Dignidad del Sureste se hermanara con el del centro; el cobarde asesinato de los campesinos guerrerenses, veracruzanos e hidalguenses tendió un puente de sangre morena hasta los indígenas chiapanecos; la militarización de la capital del país recordó a los capitalinos que tienen derecho a ser ciudadanos... La complicidad gubernamental (la banca) generó un amplio movimiento ciudadano (de deudores), El Barzón, que se resiste a ser despojado de todo lo logrado con su trabajo y esfuerzo..» (*La Jornada*, 27/7/95).

Ojalá tenga razón Marcos y que toda esa acumulación de malestares se conjugue para lograr un cambio hacia la democracia y no hacia el desorden total o hacia la militarización de México. En septiembre de 1968 también veíamos acumularse de nuestro lado a todos los mexicanos: Topilejo y los campesinos, los ferrocarrileros de Pantaco y la clase obrera... El cambio no se produjo, perdimos la universidad, la dirigencia del movimiento fue encarcelada o muerta y las demandas gestionadas por el propio gobierno. Algo así percibimos cuando el EZLN se brincó, el 18 de diciembre de 1994, las líneas del Ejército sobre las que estaba establecida la tregua; 19 días después de la toma de posesión del nuevo régimen los zapatistas se apoderaron de cerca de cuarenta municipios y con ello pusieron en claro que su movimiento no era esencialmente militar sino esencialmente social y cultural. Menos de 24 horas después, el peso se devaluaba en un cincuenta por ciento, las reservas nacionales se consumían al tiempo que el capital internacional volaba a otras regiones del globo más estables. Seis semanas más tarde fue tomado todo su territorio y arrinconada su dirigencia en la selva.

3. El patrón según el cual funcionamos los mexicanos cuando se rompe el orden nos enseña que es ridículo separar lo local de lo nacional; por más que la situación de los indios de Chiapas sea diferente a la de los mexicanos del norte, ello no anula el que una de nuestras soleras de comportamiento continúe siendo *la cargada*, la acumulación de fuerzas, que igual funciona para robustecer al tlatoani que para derrocar al gobierno: las clases ilustradas de San Luis Potosí, las gavillas del norte y

los peones acasillados del sur se aliaron como un rayo contra el Estado central al inicio de la Revolución de 1910. Inmediatamente después del levantamiento de los zapatistas de Chiapas, las organizaciones indígenas y campesinas tomaron 50.000 hectáreas sobre las que no se ha podido encontrar una solución y reconocieron al EZLN como fuerza beligerante. Estos serios peligros para la estabilidad nacional se dieron en medio de un escenario que, desde 1988, había sido alimentado por la imposición de los gobernantes vía el fraude electoral en Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Yucatán, México, y últimamente en Tabasco, Veracruz y el propio Chiapas (sin dejar de lado a la elección presidencial). No olvidemos tampoco que en los meses recientes se pueden constatar en el ambiente social muchas manifestaciones derivadas de esa otra solera del comportamiento de los mexicanos cuando se rompe el orden o se advina su debilitamiento: la *revuelta plebeya*, que comienza naturalmente con la sorna, la fiesta callejera (el festival de rock), la desobediencia, el reto, y se amplifica hacia la violencia desorganizada y la destrucción pura y simple. En nuestra sociedad no es la semejanza en la identidad de los alzados lo que los mantiene juntos sino el compartir un mismo adversario: cuestionado éste todo pasa a ser desorden. El principio unificador de nuestra sociedad es, por extensión, estatal y no social: producto del no haber podido construir actores sociales con cierto poder, intermediarios entre el Estado y los ciudadanos dispersos o las masas. Nuestras clases sociales altas, pero también las obreras y las intermedias, han sido siempre barridas por la revuelta, la guerra, los capitales exteriores, pero sobre todo por el pavor estatal y de toda nuestra cultura a convivir con el otro y a respetarlo. Por ello, seguimos siendo caldo de cultivo para los levantamientos generalizados en contra del adversario estatal compartido (sobre todo cuando da visos de antinacionalismo).

4. El día 9 de febrero de 1995 el presidente Zedillo tomó la decisión de romper la tregua con el EZLN. Con una cierta perspectiva temporal podemos rearmar los pedazos y entender por qué tomó esta medida arriesgándose incluso a pagar el costo de la radicalización social (había que ver la furia de los jóvenes al grito de «todos somos Marcos», durante las manifestaciones que sucedieron a esa desafortunada declaración), y destrozando de plano el Acuerdo Político Nacional firmado apenas en enero por todos los partidos para hacer frente a la crisis económica que estalló en diciembre de 1994 y que provocó una devaluación del peso frente al dólar que ha terminado siendo de cerca del 100%.

Setenta y dos horas después el dispositivo se encontraba perfectamente clarificado: un diálogo y un acuerdo políticos con el zapatismo tal como se encontraban las posiciones militares entre el Ejército Zapatista y el Ejército Federal hasta el 9 de febrero de 1995 no era aceptable para el presidente Zedillo y para las Fuerzas Armadas (y seguramente tampoco lo era para las clases dominantes regionales, el empresariado nacional y las instituciones financieras nacionales e internacionales). Tal acuerdo

hubiera implicado reconocer de alguna manera el control por parte de esas fuerzas sobre la mitad del territorio chiapaneco donde se había promulgado la autonomía de los municipios indígenas y se comenzaba incluso a recaudar impuestos para el gobierno paralelo del candidato perredista a la gubernatura de Chiapas: Amado Avendaño.

En menos de cien horas de rota la tregua la situación cambió radicalmente: ahora el EZLN se encontraba replegado en el interior de la selva Lacandona, mientras el Ejército Mexicano estableció su control militarizando los municipios autonomistas. Visto así, el operativo pareció constituir un éxito rotundo. Sin embargo el costo no fue bajo de ninguna manera, pues el resultado que se tuvo fue la militarización de una parte del territorio mexicano (50.000 soldados y 200 millones de dólares anuales), y el peligro de que esas fuerzas se eternizaran ahí para asegurar que los grupos populares-campesinos-indígenas no pudieran retomar los predios y los palacios municipales. Es decir: el Ejército había pasado a ser el garante sin más del *status quo*.

Como se ha puesto de manifiesto en otros países latinoamericanos, el control militar y la destrucción de las intermediaciones civiles acarrea costos insospechados, al tiempo que aleja la solución en torno a los problemas sociales que dieron pie a dichos levantamientos armados. En efecto, si tomamos los ejemplos de Guatemala y Perú, los otros dos países con indigenismo profundo y guerra campesina, podremos constatar (Dirk Kruijt: «Guerras étnicas y gobierno militar» en *La Jornada Semanal* 7/1994), que en la persecución de la guerrilla los presidentes fueron convertidos prácticamente en rehenes de sus fuerzas armadas, y terminaron inevitablemente siendo asesorados por intelectuales y políticos del ejército. La sorpresiva elección del presidente Fujimori y la debilidad consecuente de su plan de gobierno, lo convirtieron en huésped del Círculo Militar.

En México, al menos hasta los primeros meses de 1995, no se había establecido una situación de guerra prolongada y la sociedad civil se mantuvo firme tratando de evitarla. Lo que no quedaba claro era en qué medida el gobierno del presidente Zedillo había intentado realmente alejarse de ese escenario. Los días que sucedieron a la ruptura unilateral de la tregua chiapaneca (y sus pretextos infundados), nos pusieron a temblar porque constituyeron *de facto* la entrega del conflicto del sureste a las fuerzas armadas y se acompañaron del desmantelamiento, o del retraimiento al menos, de los actores políticos y de la sociedad civil (comenzando por la iglesia progresista, a juzgar por los ataques físicos al obispo Samuel Ruiz). Sin estos actores es impensable la reconciliación y la reconstrucción. En Ayacucho, por ejemplo, la autoridad de las universidades dio paso a los comandos militares, la iglesia católica a los liderazgos evangélicos atomizados, el sector público y la burocracia regional se desdibujó en fundaciones privadas, los grandes comerciantes

en mafias coqueras y los comuneros indígenas se convirtieron en rondas campesinas autoarmadas.

Si bien es cierto que el Ejército Mexicano en su avance hacia la Lacandonia no atentó *de manera directa* contra la integridad física de la población civil (aunque existen claras excepciones), lo cierto es que su labor fue la destrucción sistemática de los medios de reproducción material de todas las comunidades sospechosas de simpatizar con el movimiento zapatista (que son la gran mayoría), aquéllas de las que huyeron sus habitantes, con excepción de los viejos y algunos niños y mujeres. En esas comunidades fueron destrozados los utensilios domésticos, los aperos de labranza (reatas, sillas de montar, machetes, hachas, limas...), destruidos (no robados) los radios, los hornos para el pan, los molinos y, más importante aún, los granos para la inminente siembra; reventadas las tuberías, vaciados los depósitos de agua (cisternas, ollas tradicionales bajo tierra, cubetas...), etcétera. Entonces el Ejército retiró de los poblados a sus efectivos y su alucinante tecnología bélica, para concentrarse en dos operativos complementarios: por un lado, adelantó sus columnas lo más posible ya dentro de la selva para provocar el repliegue del EZLN, pero sobre todo, como lo hace un exprimidor de limones, para extraer a la población civil que se había refugiado en la selva, a la que vimos regresar, rendida: familias enfermas, exhaustas, moralmente destruidas, atestiguando con rabia, impotencia y llanto apenado la destrucción de todos sus bienes, el fin de la reproducción campesina, la angustia de no poder sostener el ciclo vital en un medio tan adverso, la inminencia de la muerte: «nos chingó el gobierno», decían, personalizando al Ejecutivo, y rechazando las desparas Pronasol

Al lado de esto pudimos atestiguar el repoblamiento de muchas comunidades con contingentes de refugiados que habían abandonado la zona durante el primer año del conflicto y que se consideraban más afines al gobierno, grupos de desplazados totalmente dependientes del sustento gubernamental (al grado de no tener que trabajar): es decir, la creación de «aldeas estratégicas» como fue denominada esta técnica en Vietnam y en Guatemala –cuya más reprobable función es la de delatar a los miembros de la comunidad sospechosos de ser zapatistas o simpatizantes del zapatismo.

Visto en su conjunto, el operativo tuvo como meta el separar a la dirigencia zapatista de la base social del zapatismo; destruir lo que fue un movimiento social, atomizando y desmoralizando a sus bases, separándolas de su *intelligentzia* (no únicamente militar) arrinconada en la selva. Esto equivale a desmantelar una identidad colectiva plena de fuerza cultural y material, plena de esperanza –y única vía para el tan cacareado «desarrollo autosustentado»– para hacerla tributaria del Tlatoani Mexica (a este respecto, sin duda, el ensayo de Gertz sí requiere

de una puesta al día porque la identidad regional indígena está siendo ahí desmantelada). Un movimiento social que pide a gritos durante un año que lo reconozcan en su autonomía, que manda señales desesperadas de su alta vocación sociopolítica y cultural (con moñitos blancos en los cañones de los rifles 22), es obligado a convertirse en una guerra de guerrillas, de la misma manera como el Consejo Nacional de Huelga en el 68 fue obligado a convertirse en una cofradía de conspiradores y «delincuentes».

Si el Estado mexicano se hubiera encargado del desarrollo de los Estados Unidos durante el siglo XIX, muy probablemente hubiera perseguido a los granjeros hasta quitarles todo, dispersarlos y convertirlos en pordioseros del programa «Solidaridad». ¿Será que nuestra cultura no puede con la libertad del otro? Si una región no está bajo control de un enviado del centro (un presidente municipal priísta chiapaneco, en el ejemplo, organizador de la sumisión y destructor de la identidad colectiva), la soberanía parece estar en peligro. Nuestra soberanía estatal no sabe convivir con la soberanía social. Qué cultura tan perversa y tan cobarde la de este orden político al que no le parece grave hipotecar el petróleo con los Estados Unidos durante muchos años o para siempre –como lo han evidenciado los acuerdos internacionales para hacer frente a la crisis de 1995–, pero se aterra y manda tanques y helicópteros artillados para arrebatarse a unos indios la bandera nacional y destrozar sus medios de reproducción.

5. Pero desde el zapatismo, ¿no se reproduce también la ley de hierro de la mexicanidad? El movimiento zapatista de los indios chiapanecos tuvo un impacto brutal en la cultura nacional y fuera de México porque era una innovación en varios sentidos: en primer lugar, se trataba de una vanguardia no foquista sino largamente implantada y compenetrada en los pueblos indios, respetuosa de aquella cultura y reconstructora de ella; fue y sigue siendo la imagen de los incluidos al servicio de la exclusión. En segundo lugar habló desde un principio de los asuntos vitales de esos pueblos; definió sus límites frente a la locura globalizadora haciendo estallar la revuelta el 1º de enero de 1994, en la fecha exacta en que entró en vigor el TLCAN; e inmediatamente puso en discusión el asunto de la autonomía de los pueblos indios.

Es cierto que durante todo ese tiempo no se descuidó la reorganización de los municipios de las Cañadas y la Selva, en donde los zapatistas habían marcado su territorio desde que echó a andar la amnistía, ni se descuidó tampoco la cuestión de la subsistencia e incluso la reeducación en torno a ciertos principios (como la erradicación del consumo de alcohol, por ejemplo). Es cierto en fin que el llamado Gobierno en Rebeldía (encabezado por Amado Avendaño, candidato perredista derrotado en las elecciones gracias a un fenomenal fraude que no sorprendió a nadie), había reforzado la autonomía de las regiones y los

municipios declarados autónomos (aquellos que habían quedado bajo la circunscripción zapatista desde las primeras dos semanas del conflicto). Sin embargo, como dijimos, el zapatismo decidió ampliar su radio de influencia hasta ocupar militarmente casi la mitad de los municipios del estado de Chiapas, hacia el 18 de diciembre de 1994 (lo que se asoció a la devaluación del peso 24 horas después de dicha maniobra).

¿Coincidían estas nuevas fronteras con la identidad sustentable del zapatismo? En un sentido sí, quién lo puede dudar, porque esos municipios, en especial los de los Altos de Chiapas, son abrumadoramente indígenas y profesan gran simpatía por el EZLN y, en algún grado, militan en él. Pero quizás no, desde otra perspectiva, porque el zapatismo excedió los límites de sus fronteras naturales ocupando esos nuevos territorios y permitió justificar, un mes y medio más tarde, la ruptura de la tregua por parte del gobierno a partir del 8 de febrero de 1995 y su avance sobre los territorios autónomos, con el claro objetivo de separar al zapatismo social del zapatismo militar.

Veinte puntos de abasto, centros de Acción Social, fueron estratégicamente instalados en aquellos municipios que durante el año 94 fueron zapatistas. Algunos líderes campesinos de estas regiones, durante una larga época cercanos al zapatismo, y con gran legitimidad entre sus bases sociales, declaraban no poder competir así: «estamos perdiendo a nuestras bases; aquellos les dan láminas, dinero y despensas, nosotros los convocamos a marchas y plantones». Las organizaciones indígenas y campesinas del estado de Chiapas decidieron, abrumadoramente, el 27 de mayo, entablar negociaciones con el delegado del presidente de México con la esperanza de que a través de sus organizaciones se canalizaran los recursos gubernamentales a la región.

La reacción del zapatismo hacia esto fue fulminante: firmado por el subcomandante Marcos, en forma de misiva a la prensa nacional pudimos leer el siguiente mensaje: «Al establecer una negociación paralela a la de San Andrés, el grupo de claudicantes que 'dialogan' con (el encargado para canalizar los recursos gubernamentales), respondió con la traición a los anhelos de unidad del pueblo chiapaneco. Se encuentran desanimados por los golpes recientes que hemos sufrido unos y otros... Olvidaron que la victoria es producto de un trabajo de organización, de suma de esfuerzos...» Los líderes agrarios se lamentaban por este veredicto y se limitaban a repetir que ellos llevaban «veinte años organizando de manera independiente a los campesinos en estas regiones y vamos a vivir y luchar aquí al menos otros tantos años».

Junto a eso, naturalmente se instauró un amedrentamiento permanente hacia los grupos no controlados: el ejército entra directamente a domicilios escogidos y conduce a los jefes de familia a la escuela o a la iglesia para interrogarlos sobre los dirigentes de la comunidad, su pertenencia al

zapatismo, el abasto a las tropas en la montaña, exigiéndoles demostrar su distancia con respecto al EZLN afiliándose a las organizaciones oficiales. No se puede hablar de maltratos directos y torturas, pero uno puede imaginarse la situación psicológica que conlleva para esas personas y sus familias el quedar señalados de esa manera (de la «guerra de baja intensidad» son parte estas maniobras desmoralizadoras).

Así que podemos preguntarnos ante este panorama si del lado del zapatismo armado no hay acaso también un regreso a la ley de hierro de la acción social en un país de herencia estatal como lo es México: la lógica reiterativa del suicida y el asesino. Por parte de los movilizados la urgencia por acumular fuerzas nacionales para derrotar al Estado nacional: la lógica suicida de destruirlo todo y ocupar ese espacio, o estrellarse contra el muro del autoritarismo; por parte del Estado, el no poder convivir con ningún promontorio, por pequeño que sea, fuera de la pirámide de Aztlán.

¿Cómo no explicitar estos temas si, como decíamos, el zapatismo surgió como un movimiento social cuya fuerza ha estado constituida por su contenido casi ciento por ciento indígena? ¿Cómo no explicitar estos temas si hoy constatamos con angustia que el zapatismo social se vacía, es *desconstruido* por los brazos del Tlatoani y sus organizaciones y dirigencias todavía auténticas, o alguna vez auténticas, son golpeadas por las fuerzas dominantes y por el propio EZLN y esas comunidades se dividen, se confrontan en la inminencia de la guerra fratricida? Es en el referente regional y en la utopía de superar la situación de miseria indígena en donde radica la fuerza y la legitimidad del zapatismo. Nos parece que todo esto complementa la visión de Gunther Dietz, recordando los embates mayúsculos a los que dichas identidades sociales regionales se encuentran expuestas.

Anotemos en fin una cuestión que se relaciona con el ensayo de Dietz pero también con la imagen que de México se ha proyectado a partir de 1994: el zapatismo ha sobredimensionado al México indígena, apoyado en referentes culturales poderosos, con fuertes raíces organizativas que le permiten acantonarse defensivamente, en lo regional, por ejemplo, como lo ejemplifica Dietz.

No cabe duda que Chiapas ha venido a poner en claro que tan excepcional es el México *profundo* como el México *transnacional*. Pero tan iluso sería querer trasladar el conjunto hacia un extremo como hacia el otro, pues entre el 20% del México tradicional y el 30% del México integrado se extiende, con toda su crudeza y su desorden, el México *roto*, el desarraigado, el de la modernización salvaje: los grupos sociales del modelo anterior que nunca fueron integrados por la modernidad y a los que se agregó la pedacería dejada por la «década (y media) perdida» y el

shock neoliberal; las masas de la marginalidad urbana y del mercado informal (quizá dos de cada cuatro mexicanos), a los que hay que agregar los obreros de las maquiladoras y sus desordenadas familias así como a los jornaleros migrantes, a los habitantes de pequeñas y no tan pequeñas ciudades, que ya no son campesinos y para los que casi no hay empleo en esas economías regionales condenadas a no ser competitivas en mercados abiertos. Esta imagen del total desorden es la cara principal y cada vez más palpable de México y no la del indigenismo profundo.